



El Fiscal General del Estado

REGISTRO GENERAL FISCALIA
GENERAL DEL ESTADO

Salida

001 N°. 201700012852

20/09/17 14:26:55

EXCMO FISCAL SUPERIOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA E ILMOS. SRES. FISCALES JEFES PROVINCIALES

La notoriedad de la prohibición de los actos de organización del referéndum de autodeterminación convocado para el próximo 1 de octubre hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores, dirigida a tal fin, sea indiciariamente constitutiva al menos de los delitos de desobediencia (art. 410.1 CP, penado con multa e inhabilitación especial), en cuanto supondría un incumplimiento manifiesto de las resoluciones del TC, prevaricación (art. 404 CP penado con inhabilitación especial), en cuanto supondría la adopción de resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico y malversación de caudales públicos (previsto en el art. 432 CP y penado con prisión de hasta ocho años e inhabilitación absoluta por hasta veinte años) en cuanto supondría la disposición de fondos públicos para la realización de actividades delictivas.

Sobre estas bases, la conducta de todas las autoridades, funcionarios públicos y particulares que manifiestan expresa o tácitamente su rechazo a participar en actos de promoción, organización y/o celebración del denominado referéndum de autodeterminación, sólo puede ser considerada como el cumplimiento escrupuloso del ordenamiento jurídico vigente.

En efecto, las normas sobre las que pretende celebrarse este referéndum han sido expresamente suspendidas por el TC. La suspensión de una norma implica que la misma no puede surtir efecto alguno, de manera que no se puede realizar ninguna actuación tendente directa o indirectamente a su ejecución, ni existe obligación alguna para su cumplimiento. En definitiva, se trata de una norma que carece de toda fuerza vinculante. Por lo tanto, ningún



El Fiscal General del Estado

ciudadano puede sufrir efecto negativo alguno por el estricto cumplimiento de la Ley.

En los últimos días han aparecido en diversos medios de comunicación noticias sobre campañas encaminadas a “señalar” a determinados responsables municipales por su negativa a incumplir la Ley.

Estas campañas pueden tener relevancia desde el punto de vista jurídico penal, a través de la figura del delito de odio (art. 510.1. apartados a) ó b) CP), en cuanto se estaría promoviendo la hostilidad hacia determinadas personas, por motivos ideológicos o políticos, responsabilizándolos directamente ante a los ciudadanos de impedir un supuesto ejercicio del derecho a la autodeterminación.

Del mismo modo los medios de comunicación están dando cuenta de noticias sobre presuntas amenazas y coacciones recibidas por alcaldes, funcionarios y particulares que se oponen a colaborar en el referéndum ilegal de autodeterminación.

Todas estas conductas suponen un ataque contra la pacífica convivencia en Cataluña, y una grave perturbación de los derechos, no sólo de las personas directamente destinatarias de las amenazas, sino de la población en su conjunto, en cuanto lanzan un mensaje coactivo general dirigido a todas las autoridades, funcionarios y ciudadanos defensores del Estado de Derecho y del ordenamiento constitucional.

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el art. 25, párrafo primero EOMF, interés de V.E./V.I. se promueva con eficacia y celeridad la acción penal contra los autores de estas conductas, procediendo ante cualquier *notitia criminis*, -sea por denuncia de los ofendidos, sea por cualesquiera otras



El Fiscal General del Estado

vías, tales como el conocimiento a través de noticias en medios de comunicación- a la incoación de diligencias de investigación penal.

A tal efecto, se podrá solicitar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Mossos d'Esquadra, Guardia Civil o Policía Nacional) a fin de que elaboren los correspondientes atestados, en los que se indiquen los lugares en los que se están produciendo estos hechos, así como su posible autoría, y a los efectos de que procedan a la retirada de los carteles o pasquines intimidatorios y, en general, los efectos o instrumentos con los que se ejecuten este tipo de conductas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 770.3ª LECrim.

En el caso de que el municipio en cuestión esté situado en el ámbito territorial de una Fiscalía de Área se procederá por el Ilmo. Sr. Fiscal Jefe a dar traslado a la misma de la presente instrucción

Madrid, 20 de septiembre de 2017

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

José Manuel Maza Martín

EXCMO SR. FISCAL SUPERIOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. ILMOS. SRES. FISCALES JEFES DE LAS FISCALÍAS PROVINCIALES DE BARCELONA, TARRAGONA, LLEIDA Y GIRONA